



**ACTORA:** [REDACTED]

**DEMANDADAS:** SECRETARÍA DEL TRANSPORTE.

SECRETARÍA DE LA HACIENDA  
PÚBLICA.

AMBAS DEPENDIENTES DEL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

**MAGISTRADO:** JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL.

**SECRETARIO:** JOSÉ FÉLIX CÁRDENAS GAYTÁN.

Guadalajara, Jalisco, 15 quince de diciembre de 2020 dos mil veinte.

**V I S T O S** para resolver en **Sentencia Definitiva** los autos del Juicio Administrativo cuyo número de expediente se indica al rubro, promovido por [REDACTED] en contra de la **SECRETARÍA DEL TRANSPORTE**, así como de la **SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, AMBAS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**, y;

#### R E S U L T A N D O

1. Mediante escrito presentado el 3 tres de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, a través de la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, suscrito por [REDACTED] por su propio derecho interpuso Juicio en Materia Administrativa, por los motivos y conceptos que del mismo se desprendieron.

2. Por auto de 9 nueve de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, se admitió la demanda, teniéndose como autoridades demandadas a la Secretaría del Transporte y Secretaría de la Hacienda Pública, ambas dependientes del Gobierno del Estado de Jalisco, y como actos administrativos impugnados, las cédulas de notificación de infracción (exceso de velocidad) folios [REDACTED], así como el refrendo anual de placas vehiculares respecto del ejercicio fiscal **2019** dos mil diecinueve.

Por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, se admitieron las pruebas ofrecidas, teniéndose por desahogadas, las documentales identificadas con los números 1, 2, 3 y 4, al igual que la presuncional legal y humana, ofertada con el número 5, de su escrito inicial de demanda, en virtud de que la naturaleza de las mismas lo permitió.

Con las copias simples del escrito inicial de demanda y de los documentos anexos a la misma se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas para que dentro del término de

diez días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación produjeran contestación a la demanda, ofrecieran y exhibieran pruebas con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se les tendrían como ciertos los hechos que no fueran contestados salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resultaren desvirtuados y se les declararía por perdido el derecho a rendir pruebas.

3. Con fecha 22 veintidós de enero de 2020 dos mil veinte, se tuvo al Subprocurador Fiscal del Estado, quien compareció en representación y sustitución de las autoridades demandadas –Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco-, produciendo contestación a la demanda, por opuestas las excepciones y defensas que de sus escritos se desprendieron, se admitieron las pruebas ofrecidas por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, teniéndose por desahogadas, las documentales ofertas con el número 1, al igual que la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, marcadas con los arábigos 2 y 3, además se tomó debida nota de la causal de improcedencia vertida; con las copias simples del escrito de contestación de demanda, se ordenó correr traslado a la parte actora para que quedara debidamente enterada de su contenido.

En ese orden de ideas, se dejó constancia de que la autoridad demandada - Secretaría de la Hacienda Pública-, por conducto de su representante, remitió copias certificadas de la Imposición de Multa y Requerimiento del Pago del Derecho de Refrendo Anual de Tarjeta de Circulación y Holograma folio [REDACTED] con sus respectivas actas de notificación, motivo por el cual se concedió a la parte actora el termino de 10 diez días, para que ampliara su demanda en relación a los actos referidos, con el apercibimiento que de no hacerlo así de le declararía por perdido su derecho.

Por otro lado, se dio cuenta que la autoridad demandada –Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco-, no produjo contestación en tiempo y forma a la demanda interpuesta en su contra, no obstante, de haber sido debidamente emplazada y notificada mediante el oficio 43939/2020, recibido el 12 doce de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, por la Dirección General Jurídica de la Secretaría del Transporte, que se encuentra agregado a foja 12, en tal virtud se le hizo efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de 9 nueve de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, por lo que se le declaró la correspondiente rebeldía, teniéndole como ciertos los hechos que le fueron imputados por la parte actora de manera precisa, salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resultaren desvirtuados, así mismo se le declaró por perdido el derecho a rendir pruebas.

4. Mediante acuerdo de 29 veintinueve de septiembre de 2020 dos mil veinte, se advirtió que la parte actora fue omisa en atender al requerimiento formulado en auto de 9 nueve de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, por lo cual se le hizo efectivo el apercibimiento ahí contenido, teniéndole por perdido ese derecho.

En virtud de lo anterior y de que las pruebas admitidas, se habían desahogado en su totalidad, además de que lo controvertido involucra cuestiones puramente de derecho, se otorgó a las partes un término común de tres días a fin de que formularan **alegatos**, apercibiéndoles que, en



caso de no hacerlo así, se les tendría por perdido el derecho en ese sentido y se turnarían los autos para que se dictara la sentencia definitiva que en derecho correspondiera.

5. Sin que al efecto las partes hubieran comparecido a expresar alegatos dentro del término que para tal efecto les fue concedido, en el último párrafo del acuerdo establecido en el punto que antecede, en consecuencia, se les hacen efectivos los apercibimientos ahí contenidos y se les **declaro** por perdido el derecho a rendir alegatos, ordenándose turnar los autos para que se dicte la Sentencia Definitiva que en derecho corresponda, la cual hoy se pronuncia de conformidad a los siguientes:

## C O N S I D E R A N D O S

I. Este Tribunal es competente para conocer y resolver la presente controversia con base en lo dispuesto por el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 3, 4, 5, 10 y demás relativos de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 72, 73, 74, relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

II. La existencia de los actos administrativos impugnados se encuentra debidamente acreditada en actuaciones con las documentales que obran agregadas a fojas 8 a 10, a las que se les otorga valor probatorio pleno en los términos de los artículos 48<sup>1</sup>, 57<sup>2</sup> y 58<sup>3</sup> de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como en los diversos numerales 399<sup>4</sup> y 400<sup>5</sup> del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley Adjetiva de la Materia.

III. Según criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, no se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciera valer la accionante en su escrito inicial de demanda, ni la contestación realizada por los representantes de las autoridades demandadas, toda vez que dicha omisión no deja en estado de indefensión a ninguna de las partes; se sustenta lo anterior por analogía y para mayor claridad se transcribe la siguiente Jurisprudencia:

<sup>1</sup> Artículo 48. En los juicios a que se refiere esta ley será admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional mediante absolución de posiciones, las que no tengan relación con los hechos controvertidos, las contrarias a la moral y al derecho; y las que no hayan sido ofrecidas ante la autoridad demandada en el procedimiento administrativo, salvo que en éste no se le hubiera dado oportunidad razonable de hacerlo.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse antes de citación para sentencia. En este caso, la Sala ordenará dar vista a la contraparte para que en el término de cinco días exprese lo que a su derecho convenga, reservándose su admisión y valoración hasta la sentencia definitiva.

<sup>2</sup> Artículo 57. El ofrecimiento y desahogo de pruebas, salvo lo expresamente previsto en la presente ley, se regirá por las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

<sup>3</sup> Artículo 58. La valoración de las pruebas se hará conforme a las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

<sup>4</sup> Artículo 399.- Los instrumentos públicos hacen prueba plena, aunque se presenten sin citación del colitigante, salvo siempre el derecho de éste para redarguirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos y archivos. En caso de inconformidad con el protocolo o archivo, los instrumentos no tendrán valor probatorio en el punto en que existiere la inconformidad.

<sup>5</sup> Artículo 400.- Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde; y no podrán objetarse sino con otros posteriores de la misma especie, salvo el caso de simulación en el que se podrá hacer uso de cualquier otro medio de prueba.

**“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.** De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.” Novena Época. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI. Mayo de 2010. Tesis: 2a./J.58/2010. Página: 830.

IV. Antes de entrar al estudio de los conceptos de nulidad realizados por la parte actora, en primer término y por ser de orden público se estudia la causal de improcedencia, promovida por el Subprocurador Fiscal del Estado, quien compareció en Representación de la autoridad demandada –Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco-, en su escrito de contestación a la demanda recepcionado por la Oficialía de Partes Común de este Tribunal el día 17 diecisiete de enero de 2020 dos mil veinte, (fojas 14 a 18), previstas por el artículo 29 fracción IX, en relación con el 30, fracción I<sup>6</sup>, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que literalmente establece:

**“Artículo 29.- Es improcedente el juicio en materia administrativa, contra los actos:**

---

<sup>6</sup> Artículo 30. Procede el sobreseimiento del juicio:

I. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;



*IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley.”*

Sostiene la representante de la Secretaría de la Hacienda Pública, que el juicio de nulidad no es la vía idónea para combatir el pago del derecho de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma, por ser una disposición de orden público e interés social, emanada del Congreso del Estado de Jalisco.

**La causal de improcedencia se estima infundada.**

Lo anterior, en razón a que la parte actora exhibió la hoja de liquidación vehicular respecto el automotor con placas de circulación [REDACTED], expedido por la Secretaría de la Hacienda Pública, para acreditar la existencia de los actos impugnados; es decir, los actos atribuidos a la citada Secretaría, para tal efecto se cita el texto del artículo 1, segundo párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el cual establece lo siguiente:

*“**Artículo 1.** El juicio en materia administrativa tiene por objeto resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos descentralizados de aquellas, con los particulares. Igualmente, de las que surjan entre dos o más entidades públicas de las citadas en el presente artículo.*

*Procede el juicio en materia administrativa en contra de disposiciones normativas de carácter general siempre que no se trate de leyes emanadas del Congreso. **En estos casos la demanda deberá interponerse en contra del primer acto de aplicación**, ante las salas del Tribunal de lo Administrativo...”.*

En ese orden de ideas, como se advierte del numeral transcrito, el juicio en materia administrativa, resulta procedente, cuando se combatan normas generales, siempre y cuando no sean Leyes emanadas del Congreso y deberá interponerse en contra del primer acto de aplicación, siendo que la parte actora, precisó como actos administrativos impugnados, el refrendo anual de placas vehiculares del año 2019; contribución que se encuentra prevista en los artículos 23 en su fracción III, de la Ley de Ingresos respectiva; misma que es una norma de carácter general y en el caso particular es procedente el juicio de nulidad contra dicho acto, ya que el actor con el adeudo vehicular, acredito estar en la hipótesis de aplicación, por lo que sitúa en el supuesto señalado en el presente párrafo.

V. Resulta **procedentes** los conceptos de impugnación expresado por [REDACTED], contenidos en su escrito inicial de demanda, por lo que de conformidad a lo dispuesto por las fracciones II y IV de los artículos 74<sup>7</sup> y 75<sup>8</sup> de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, procede **declarar** la **nulidad** de las cédulas de notificación de infracción (exceso de velocidad) folios [REDACTED].

Asimismo, **se reconoce** la **validez** del refrendo anual de placas vehiculares del ejercicio fiscal **2019** dos mil diecinueve, imputado al vehículo con placas de circulación [REDACTED]

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 72 de la normatividad invocada en el párrafo que antecede, se procede al examen de las causas de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución combatida y más benéfica para el accionante, atento al citado dispositivo legal, así como a la tesis que aquí se inserta:

**“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN, DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR AQUELLOS QUE LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS BENÉFICA PARA EL ACTOR. En el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se encuentra contenido el principio de exhaustividad de las sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, iniciando por aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, y después por los que se refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del procedimiento, lo que se traduce en la obligación de analizar, en primer lugar, los motivos de nulidad que lleven a una declaratoria de nulidad más benéfica para el actor, y sólo en el evento de estimarlos infundados, se pronuncie sobre los conceptos de impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad para efectos, bien sea de la llamada comúnmente "del tercer tipo", por versar sobre el ejercicio de facultades discrecionales o, en su caso, para otros efectos.”** Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados

---

<sup>7</sup>Artículo 74. La sentencia definitiva podrá:  
I. Reconocer la validez de la resolución o del acto impugnado  
II. Declarar la nulidad de la resolución o acto combatido;”

<sup>8</sup> “Artículo 75. Serán causas de anulación de una resolución, de un acto o de un procedimiento administrativo:  
I. ...  
II. ...  
III. ...  
IV. La omisión o incumplimiento de las formalidades que legalmente debe revestir la resolución o el acto, cuando afecte las defensas del particular y trascienda el sentido de la resolución o acto impugnado;



*de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Tesis: VIII.1o.86 A. Página: 1828.*

En atención a los numerales y Jurisprudencia señalada, se procede al análisis del quinto concepto de impugnación vertido en su escrito inicial de demanda, en el cual refiere en primer término que las cédulas notificación de infracción impugnadas, se encuentran indebidamente fundadas y motivadas, toda vez que la autoridad emisora no realizó una manifestación clara y precisa del objeto del acto, transgrediendo el numeral 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, por lo que considera que deberá declararse la nulidad de los actos materia de la controversia.

Al manifestarse a lo anterior, el Subprocurador Fiscal el Estado, quien compareció en representación y sustitución de la autoridad demandada –Secretaría de la Hacienda Pública del Estado-, en su escrito de contestación de demanda recepcionado por la Oficialía de Partes Común de este Tribunal el 17 diecisiete de enero de 2020 dos mil veinte (fojas 14 a 18), manifiesta que resulta infundado e inoperante los argumentos vertidos por el accionante, toda vez que, el refrendo anual no deviene de una resolución que deba notificarse, sino es una obligación de pago prevista por el artículo 23 de la Ley de Ingresos, en correlación con el numeral 70 de la Ley de Hacienda Municipal, ordenamientos del Estado de Jalisco.

Sin que al efecto la autoridad demandada –Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco-, haya realizado manifestación alguna toda vez que en actuación de 22 veintidós de enero de 2020 dos mil veinte, se le declaró la correspondiente rebeldía, teniéndole como ciertos los hechos que le fueron imputados de manera precisa, salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resultaren desvirtuados, asimismo se le declaró por perdido el derecho a ofrecer pruebas, tal como se desprende de la actuación que obra a fojas 23 y 24.

Se considera **fundado** lo aseverado por la parte actora cuando refiere que las cédulas de notificación de infracción (exceso de velocidad) que se analiza, visibles a fojas 9 y 10, de actuaciones, se encuentra indebidamente fundada y motivada, según los requisitos a que alude el artículo 8 fracción III, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, que señala:

**“Artículo 13.** *Son requisitos de validez del acto administrativo:*

- I. *Constar por escrito;*
- II. *Contener la mención del lugar, fecha y autoridad que lo suscribe;*
- III. ***Estar debidamente fundado y motivado;***

IV. *Contener la manifestación clara y precisa del objeto del acto;*

V. *Contener la referencia específica de identificación del expediente que se trate y nombre completo del o los interesados;*

VI. *Ser notificado apegándose a los ordenamientos en vigor aplicables y en su caso publicado. Igualmente deberá mencionar los recursos administrativos que puede interponer su destinatario en caso de desacuerdo;*

VII. *Dar intervención a terceros interesados cuando el ordenamiento de la materia así lo establezca; y*

VIII. *Ser efectuado por el servidor público facultado para ello.”*

Toda vez que del texto de las cédulas combatidas, como fundamentación la autoridad demandada únicamente cito entre otros artículos: “*ARTICULO 183 FRACCIÓN III MULTA EQUIVALENTE DE 10 A 30 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACION*”, aunado a que como motivación se estableció en el apartado relativo al “motivación”, se advierte que únicamente se precisó “*AL CONDUCTOR DE UN VEHICULO QUE EXCEDA EN MÁS DE DIEZ KILOMETROS POR HORA EL LIMITE DE VELOCIDAD MAXIMO PERMITIDO*”, sin establecer un razonamiento lógico en el que debieron haberse sustentado la autoridad emisora, sin especificar además las circunstancias de hechos, razones particulares y causas inmediatas que tomo en consideración para la aplicación de las multas respectivas, además de que tampoco precisan que dispositivo legal se violentó, ni estableció su nombre completo, quedando de manifiesto para ésta autoridad que con lo anterior se actualiza un estado de inseguridad jurídica e indefensión, surtiéndose lo previsto por la fracción III, del artículo 13, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, confirma lo anterior la confesión ficta de la autoridad demandada, toda vez que se le declaro la rebeldía y se le tuvieron por ciertos los hechos que no fueron contestados; Violentándose con ello las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14<sup>9</sup> y 16<sup>10</sup> de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales exigen que en todo acto de autoridad se señale con exactitud y precisión el o los dispositivos que facultan a quien lo emite, así como las normas aplicables al caso concreto en el que se apoye su actuar, atento a la exigencia

---

<sup>9</sup> Artículo 14. *A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.*

*Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”*

<sup>10</sup> “Artículo 16. *Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”*





constitucional de certeza y seguridad jurídica del particular frente a los actos de autoridad que afectan o lesionan su interés jurídico, lo que trae como consecuencia declarar **nulidad** de las cédulas de notificación de infracción (exceso de velocidad) folios [REDACTED].

Toda vez que, en la misma se dejaron de aplicar las debidas disposiciones legales, actualizándose la causal de anulación prevista por el artículo 75 fracción II de la ley adjetiva de la materia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Novena Época, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, del mes de marzo de 1996, visible en la página 769, que informa:

**“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.** *La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.”*

**VI.** Por otra parte se consideran **inoperantes** los conceptos de impugnación vertidos en su escrito inicial de demanda, para destruir la legalidad del refrendo anual de placas vehiculares del ejercicio fiscal **2019** dos mil diecinueve, en base a las siguientes consideraciones:

Ahora bien, del análisis de sus conceptos de impugnación vertidos en su escrito inicial, la parte actora no ataco en forma alguna, ni mucho menos contundente las determinaciones, fundamentos, motivos generales y específicos en la resolución combatida en esta instancia, y bajo ese orden de ideas, debe precisarse que los procedimientos en materia administrativa deben ser apegados a estricto derecho y por tanto, no puede suplirse la deficiencia de la queja ante los planteamientos jurídicos efectuados formalmente y en el caso particular, la parte actora no lo realizo de tal manera.

Por ende, de manera alguna la parte accionante, no se encuentra combatiendo como ya se dijo, los fundamentos legales y motivos o razones particulares que fueron tomados en consideración por la autoridad demandada para la emisión de los actos materia parcial de la controversia, dejando intocado su contenido.

En consecuencia, se arriba a la determinación en el caso que nos ocupa, los conceptos de impugnación se estimen inoperantes para trastocar la legalidad de la legalidad del refrendo anual de placas vehiculares del ejercicio fiscal **2019** dos mil diecinueve, robustece a lo anterior la siguiente jurisprudencia que a la letra dice:

**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO.** Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo.” Novena Época. Número de Registro: 191370. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Agosto de 2000. Tesis: I.6o.C. J/21. Página: 1051”.

De igual manera cobra aplicación la tesis bajo el epígrafe siguiente:

**CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES.** Son inoperantes los conceptos de violación en la medida de que el quejoso no combate a través de un razonamiento jurídico concreto, las consideraciones en que se sustentó el fallo impugnado, supuesto que no basta indicar los preceptos legales que se consideren infringidos, sino que es indispensable explicar, concretizar el daño o perjuicio ocasionado por la autoridad responsable y además argumentar jurídicamente los razonamientos o consideraciones de la resolución que se reclama. Octava Época. Número de Registro: 213355. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Febrero de 1994. Tesis: XX. J/54. Página: 80.

En conclusión, con fundamento en el artículo 74 fracción I de la Ley Adjetiva de la Materia, resulta procedente **reconocer la validez** del refrendo anual de placas vehiculares del ejercicio fiscal **2019** dos mil diecinueve.

Bajo las argumentaciones vertidas, se considera innecesario entrar al estudio de los demás conceptos de anulación y pruebas aportadas al sumario que hacen valer las partes, porque su estudio sería innecesario al no influir en la variación del sentido de esta resolución, en términos



del criterio Jurisprudencial consultable con el número de registro 172,578, Novena Época, página 1743, Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el mes de Mayo de 2007 que dice:

**“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ES INNECESARIO SU ESTUDIO, CUANDO LA DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA SENTENCIA RECLAMADA ES SUFICIENTE PARA REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal responsable, para sustentar el sentido de la resolución reclamada, expresó diversas consideraciones, las cuales resultan autónomas o independientes entre sí y suficientes cada una de ellas para regir su sentido, la ineficacia de los conceptos de violación tocantes a evidenciar la ilegalidad de alguna de tales consideraciones, hace innecesario el estudio de los restantes, pues su examen en nada variaría el sentido de la resolución reclamada, ya que basta que quede firme alguna para que dicha consideración sustente por sí sola el sentido del fallo.”**

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 47, 72, 73, 74, 75, 76, relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se concluye la presente controversia, de conformidad con los siguientes:

## R E S O L U T I V O S

**PRIMERO.** [REDACTED] parte actora en el presente juicio, **desvirtuó** la legalidad de los actos administrativos impugnados. [REDACTED]

**SEGUNDO.** Se **declara** la **nulidad** de las cédulas de notificación de infracción (exceso de velocidad) folios [REDACTED], imputado al vehículo con placas de circulación [REDACTED], por los motivos y razonamientos expuestos en el quinto considerando del cuerpo de la presente resolución.

**TERCERO.** Se **reconoce la validez** del refrendo anual de placas vehiculares del ejercicio fiscal **2019** dos mil diecinueve, por los motivos y razonamientos expuestos en el sexto considerando del tronco de la presente sentencia.

**NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.**

Así, lo resolvió el Presidente de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL, ante la presencia del Secretario de la misma JOSÉ FÉLIX CÁRDENAS GAYTÁN, quien autoriza y da fe.

**EL MAGISTRADO PRESIDENTE**

**JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL**

**EL SECRETARIO DE LA SALA**

**JOSÉ FÉLIX CÁRDENAS GAYTÁN**

*JLGM/JFCG/jagm.*

*“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y reservada que deberán observar los Sujetos Obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente”.*